JUZGADO VEINTICINCO CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá D.C., nueve de marzo de dos mil veintitrés.

Acción de Tutela No. 110013103 025 2023 00106 00.

Resuelve el Juzgado la acción de tutela formulada por GMW SECURITY RENTA CAR LTDA, a través de su representante legal Sr. LUIS WILSON GONZÁLEZ CÁRDENAS, contra la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN.

1. ANTECEDENTES

1.1. Pretende la parte accionante, la protección de su derecho fundamental de petición; y solicitó en consecuencia (i) se ordene a la accionada contestar de fondo su petición, y (ii) se compulsen copias contra los funcionarios competentes para dar respuesta, ante la oficina de control interno disciplinario y/o Procuraduría.

1.2. Como fundamento fáctico relevante expuso que, el 25 de enero de 2023 presentó derecho de petición ante la convocada, mediante el cual solicitó realizar conciliación y pago insoluto de los cánones correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2022, sobre los contratos de arrendamiento de vehículos blindados No. 1369 y 1374 de 2022, celebrados con esa entidad. Sin embargo, no ha obtenido respuesta.

1.4. Asumido el conocimiento de la presente causa por parte de este Estrado Judicial, se dispuso oficiar a la accionada UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN, a fin de que rindiera un informe detallado sobre las manifestaciones contenidas en el escrito de tutela; quien manifestó, en síntesis, que mediante oficio No. OFI23-00009207 del 01 de marzo del año en curso, remitido a los correos electrónicos operaciones@gmwblindajes.com y gerencia@gmwblindajes.com, dio contestación a la solicitud presentada por el actor, informándole que la conciliación del mes de noviembre de 2022 ya fue realizada, e indicando el día en que será adelantada la correspondiente al mes de diciembre, para los contratos 1369 y 1374 de 2022. Por lo tanto, solicitó la negación de la tutela por hecho superado.

2. CONSIDERACIONES

2.1. La Constitución Política en su artículo 86 estableció la acción de tutela, con el objeto de que toda persona pueda reclamar en todo tiempo y lugar, mediante un procedimiento breve y sumario la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de particulares en casos excepcionales.

2.2. El presente trámite se inició principalmente por la presunta vulneración al derecho de petición. El artículo 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el canon 1º de la Ley 1755 de 2015 *-por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-*, y el cual se acompasa con lo previsto en la norma 23 Superior, lo ha definido como el que tiene toda persona para presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular, con miras a obtener una pronta resolución, advirtiéndose, además, por vía jurisprudencial que a diferencia de los términos o procedimientos judiciales, esta protección fundamental es una vía expedita de acceso directo a las autoridades, y aunque su objetivo no incluye la exigencia de una resolución en un sentido determinado, sí intima para que exista un pronunciamiento oportuno y concreto frente a la reclamación que se invoca.

Por otro lado, conforme lo establece el artículo 14 del CPACA, modificado por la citada Ley, salvo norma especial, las peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. Asimismo, y conforme al párrafo de dicho canon normativo, en caso de no resolverse la petición dentro del lapso citado *"la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado (...) expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo en que se resolverá o dará repuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto"*.

Adicional a lo anterior, recuerda esta judicatura que, conforme a los lineamientos antes expuestos, el término de 15 días con que originalmente contaban las entidades, para resolver la petición formulada, dicho plazo fue

ampliado conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto 491 de 2020, expedido por el Gobierno Nacional con ocasión al estado de emergencia sanitaria decretado, por lo que el estudio de las peticiones causa de la acción de amparo debían responderse dentro del término de 30 días. Posteriormente, mediante la Ley 2207 del 17 de mayo de 2022, se derogó el precepto 5º antes mencionado, por lo que a partir del día siguiente de la promulgación de esa norma, el término para resolver las peticiones, volvió a ser de 15 días.

2.3. Caso concreto. Se encuentra acreditado que el 25 de enero de 2023, el accionante presentó un “derecho de petición” ante la entidad accionada, del que sostuvo no haber obtenido respuesta. No obstante, haciendo uso de los postulados legales y jurisprudenciales arriba esbozados, encuentra esta judicatura que frente a dicha solicitud, la convocada dio contestación mediante comunicación No. OFI23-00009207 del 01 de marzo del año en curso, en la que informó al actor, frente a sus pedimentos, que la conciliación del mes de noviembre de 2022 ya fue realizada, e indicó que el 10 de marzo del año en curso se citará al contratista para fijar la conciliación de la renta del mes de diciembre de 2022, y así proceder al pago del servicio prestado (archivo 011).

Dicha contestación fue remitida el mismo 01 de marzo de esta anualidad, a los correos electrónicos operaciones@gmwblindajes.com y gerencia@gmwblindajes.com, lo que se encuentra acreditado en el expediente (archivo 013). Así las cosas, encuentra el despacho que la accionada respondió de fondo a lo deprecado por la accionante en su petición, remitiendo dicha contestación a la dirección de correo electrónico que fue informado por este en la petición (gerencia@gmwblindajes.com)

En ese orden de ideas, se establece que ha cesado la vulneración a la garantía fundamental invocada, configurándose así la figura de carencia actual de objeto de la acción por hecho superado, figura respecto de la cual, la Corte Constitucional, ha expresado:

“La jurisprudencia constitucional ha establecido que en caso de que al momento de fallar se advierta que la acción u omisión que dio origen a la pretensión de tutela ha cesado, el pronunciamiento del juez de tutela carece de objeto, pues la amenaza o vulneración de derechos fundamentales que antes se alegaba se torna inexistente. Por tanto, el operador judicial se encuentra ante la imposibilidad de emitir alguna orden en pro de proteger las garantías fundamentales que en principio se consideraron afectadas.”

Lo anterior puede ocurrir en tres supuestos, a saber: (i) el hecho superado; (ii) el daño consumado, o (iii) cualquier otra situación que conduzca a que carezca de sentido la orden a dictar para satisfacer la pretensión de la solicitud de tutela.

Al referirse al hecho superado, el Tribunal ha indicado que es aquella situación que se presenta cuando durante el trámite de la tutela o de su revisión, cesa la vulneración o amenaza del derecho que se buscaba proteger con la solicitud de tutela como consecuencia de una actuación por parte del demandado. En consecuencia, el accionante, en principio, ya no tiene interés en la satisfacción de su pretensión pues la causa que motivó la solicitud de tutela ha desaparecido”¹

De otro lado, frente a la pretensión del accionante encaminada a la compulsa de copias contra los funcionarios competentes en dar respuesta a su petición, debe precisarse, que hace parte de las facultades y discrecionalidad del interesado, solicitar ante los entes correspondientes el inicio de potenciales investigaciones disciplinarias para que se estudie la conducta de los citados funcionarios, no siendo la tutela el mecanismo diseñado para disponer la compulsa con ese efecto, menos cuando se advierte superado el hecho que dio origen a esta acción constitucional.

3. CONCLUSIÓN

En estas condiciones la acción promovida deberá negarse, ven el entendido que, frente al derecho de petición, la vulneración ha cesado, al comprobarse la existencia de un hecho superado.

4. DECISIÓN DE PRIMER GRADO

Con fundamento y apoyo en lo dicho, el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogotá D.C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

4.1. Negar el amparo solicitado por GMW SECURITY RENTA CAR LTDA, a través de su representante legal Sr. LUIS WILSON GONZÁLEZ CÁRDENAS, contra la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN, por lo expuesto en la parte motiva.

¹ Corte Constitucional, sentencia SU453 de 2020.

4.2. Notificar este fallo conforme a lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

4.3. Remitir las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no es impugnada.

Notifíquese y cúmplase.

El Juez,

LUIS AUGUSTO DUEÑAS BARRETO

DLR

Firmado Por:
Luis Augusto Dueñas Barreto
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 025
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d5328fdc8e5832b633b430b5fdd20c4b1d5f8d7aeb23c1a83a75330a50efd9d8**

Documento generado en 09/03/2023 01:00:09 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>